

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD
Bogotá D.C, Nueve (09) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: **Medida de Protección - Apelación**
Radicación: **2023-00016**

Procede el despacho a resolver la apelación interpuesta en contra de la providencia de fecha treinta (30) de diciembre de 2022, proferida por la Comisaría Once de Familia de Suba I dentro de la medida de protección impuesta en contra de la señora **ANGÉLICA OROZCO CABRERA** y en favor del adolescente **SEBASTIÁN ALVARADO OROZCO**

La providencia que hoy se impugna declaró imponer la medida de protección definitiva en favor del adolescente **SEBASTIÁN ALVARADO OROZCO** y en contra de su progenitora la señora **ANGÉLICA OROZCO CABRERA**.

ANTECEDENTES:

El 9 de septiembre de 2022, el señor **CARLOS ANTONIO ALVARADO REYES** solicita la medida de protección en favor de su hijo **SEBASTIÁN ALVARADO OROZCO**, solicitando lo siguiente:

“Quiero que cese la violencia que se ejerce en contra de mi hijo Sebastian por parte de su mama, quiero que no le diga a mi hijo que soy un idiota, que soy un ñero, imbécil, bobo, quiero que to deje de mandar a estar conmigo, cogiéndome como si estar conmigo fuera el castigo. Sugiero que Angelica acuda a tratamiento terapéutico para que mejore su comportamiento y las pautas de crianza que tiene con Sebastian porque esto está afectando a nuestro hijo en su comportamiento y su rendimiento escolar”

Este trámite culminó con la resolución de fecha 30 de diciembre de 2022 mediante la cual se impuso medida de protección definitiva a prevención en contra de la señora **ANGÉLICA OROZCO CABRERA** por las pautas inadecuadas de crianza en contra de su menor hijo ordenándole en consecuencia abstenerse de realizar cualquier acto de descuido, violencia, agresión física, verbal, psicológica, maltrato, amenaza, humillación u ofensa. En la medida de protección se ordenó también a la agresora asistir a tratamiento terapéutico en una institución pública y/o privada con el fin de superar las circunstancias que dieron origen al presente trámite, y se modificó la custodia y cuidado personal del adolescente, otorgando una custodia compartida.

En consecuencia, de lo anterior, la señora **ANGÉLICA OROZCO CABRERA** impugna la decisión dictada por la Comisaría de Familia manifestando que no está de acuerdo con la decisión, argumentando:

Como bien se puede observar, la solicitud realizada por el señor **CARLOS ANTONIO ALVARADO REYES**, guarda relación jurídica con una SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, que es de competencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y de manera equivocada fue recepcionadas como una solicitud de medida de, protección, por lo que en este sentido la Comisaria de Familia, NO TENIA COMPETENCIA, para conocer de los hechos

denunciados | por el aquí accionante; ahora bien, en el momento en que el accionante relate los presunto hechos y describió las circunstancias de tiempo, no se relaciona la fecha en que presuntamente la señora ANGELICA OROZCO CABRERA, comete el acto de violencia intrafamiliar denunciado, pues se relaciona una fecha en la cual se expide un reporte de psicología; fecha que CLARAMENTE NO CONSTITUYE UN ACTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, por parte de la aquí accionada, y al referirse a las pretensiones guardan relación con una petición de medida de protección a su favor y no a favor a su hijo SEBASTIAN ALVARADO OROZCO

En consecuencia, el trámite de medida de protección que se realice a la solicitud del señor CARLOS ANTONIO ALVARADO REYES, no es el trámite que por ley corresponde a los hechos denunciados, violando así el DEBIDO PROCESO; a que tienen derecho los niños, niñas y adolescentes, garantía que está establecida constitucionalmente y en el Código de la Infancia y Adolescencia, en el art. 26 de la Ley 1098 modificada por la Ley 1878 de 2018.

Lo anterior, teniendo en cuenta, que a la fecha solo se ha realizado entrevista al niño SEBASTIAN ALVARADO OROZCO, incumpliendo con lo establecido en la norma cita, cuando se trata de verificar los derechos de un niño, niña, o adolescente, tal y como lo establece la Ley 1098 de 2006, modificada por la Ley 1878 de 2018, al ordenar que la verificación de derechos se deberá realizar EN TODOS LOS CASOS EN DONDE DE PONGA EN CONOCIMIENTO LA PRESUNTA VULNERACION O AMENAZA de los derechos de un menor de edad, situación que se encuentra plenamente establecida para el caso que nos ocupa, ya que el niño SEBASTIAN, se encuentra en calidad de víctima en la medida de protección MP-1131 de 2022.

Sin embargo, la COMISARIA ONCE DE FAMILIA SUBA 1, en una continuación de actos violatorios del debido proceso y del derecho a la integridad' personal del niño SEBASTIAN ALVARADO OROZCO, (art. 26 y 18 de la Ley 1098 de 2006, modificada por la Ley 1878 de 2018), realiza en la fecha 09 de septiembre de 2022, la verificación de derechos del niño SEBASTIAN ALVARADO OROZCO, SIN LA PRESENCIA DEL NINO, acto absolutamente censurable a la autoridad administrativa; pues aunado al hecho de no realizar la verificación de derechos al niño, tal y como lo ordena la Ley de Infancia y Adolescencia, realiza un acta de verificación de garantía de derechos, tomando la información suministrada por el accionante CARLOS ANTONIO ALVARADO REYES, por lo cual el concepto emitido por parte de la profesional Jenny Alexandra Rey Jagua; profesional nivel 2, carece totalmente de legalidad e imparcialidad. (visible folio 209 y 210 expediente digital)

En este punto, del incumplimiento de la verificación de derechos del niño SEBASTIAN ALVARADO OROZCO, quisiera detenerme para indicar que; el accionante el señor CARLOS ANTONIO ALVARADO REYES, NO CUMPLE CON SU OBLIGACION ALIMENTARIA, situación que se hubiera advertido, si se hubiera dado cumplimiento a la verificación de derechos tal y como lo ordena la Ley 1098 de 2006, modificada por la Ley 1878 de 2018; así mismo resulta contradictorio que ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y para realizar la conciliación frente al derecho de alimentos de su hijo, manifestara que no cuenta con vinculación

laboral y cuando se trata de excusar su responsabilidad parental, frente a las consecuencias negativas que se han generado por el comportamiento inadecuado y bajo rendimiento escolar de su hijo SEBASTIAN ALVARADO OROZCO, indique que principalmente debido a compromisos laborales, no le fue posible ejercer su rol paterno.

Ahora bien; aunado al hecho de que a pesar de que, mi poderdante concilio en un acto de buena fe, una cuota alimentaria de trescientos mil pesos mete (\$300.000.00); el señor CARLOS ANTONIO ALVARADO REYES, se molesta cada vez que la madre de su hijo, la señora ANGELICA OROZCO CABRERA, le solicita que cumpla con la cuota alimentaria y los reajustes anuales establecidos con base en el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente; a estas solicitudes es lo que llama el accionante: ". he sido víctima de malos tratos, malas palabras, y actitudes despóticas por cuanto ella tiene mayor capacidad adquisitiva que yo..."

Al respecto del fallo apelado de la medida de protección MR-1131 de 2022, sea esta la oportunidad de referirme en conjunto, al análisis del Informe Pericial de Clínica Forense y el informe de entrevista^ valoración o evaluación psicológica realizado al niño SEBASTIAN ALVARADO OROZCO, quien ante la profesional especializada forense, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Fanny Cecilia Niño Guevara, y en compañía de su progenitor, sin que tuviera conocimiento su progenitora, indica que AMBOS PADRES, y un hermano (lmea paterna) le han pegado correa; llama la atención, que reporta que el día anterior presuntamente su madre le había pegado con un correa; no obstante al examen general; la perito indica: "sin signos clínicos de trauma al momento del examen" subrayado fuera de texto.

Con lo anterior pretendo probar que; el accionante CARLOS ANTONIO ALVARADO REYES, Utilice los espacios de visitas con su hijo, SEBASTIAN ALVARADO OROZCO, para presentar una medida de protección que favoreciera su intención de asumir la custodia y cuidado personal de su hijo, y por medio de una alianza paternal que genere con su hijo, interfiere y manipula a su hijo para que brinde información exagerada o tergiversada; pues resulta incongruente que el niño reporte un golpe con correa el día anterior, y siendo las 8:21 de la mañana del día siguiente; es decir sin que hubieran transcurrido ni 24 horas del supuesto golpe con correa, el niño no presente ni up rojes o marca del supuesto golpe que recibió de su mama.

Se confirma aún más, que el Nino está brindando información producto de una manipulación y alianza paternal, pues la fecha en que fue valorado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fue lunes, y el niño SEBASTIAN ALVARADO OROZCO, había compartido fin de semana con su hijo, tal y como quedo establecido en el acuerdo de visitas suscrito ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por lo que como podría haberle pegado con una correa el día anterior la señora ANGELICA OROZCO CABRERA, a su hijo, cuando no se encontraba con el, en consecuencia; es claro el deficiente análisis probatorio por parte de la Comisaria de Familia, y en especial de la profesional de psicológica entrevistado al niño, pues lo manifestado por el niño es una clara evidencia que el señor CARLOS ANTONIO ALVARADO REYES, esta ejerciendo conductas de alianzas negativas paternas y manipulaciones hacia su hijo SEBASTIAN, constitutivas de maltrato psicológico.

De otra parte; en la entrevista realizada por la Psicóloga de la comisaría de familia, Jenny Alexandra Rey Jagua, se indica que hubo lectura del expediente, situación que se pone seriamente en duda; pues en ninguna parte del informe de entrevista hace relación a lo analizado, interpretado y concluido, en el Informe Pericial de Clínica Forense; y al realizar un análisis en las respuestas del mismo niño SEBASTIAN, el niño verbaliza que la relación con su progenitora es "mas o menos" y que lo AMENAZA que lo va a castigar físicamente sino hace caso; cabe recordar que el niño presenta dificultades para seguir instrucciones y acatar normas; pero el relato se realiza incluso de forma jocosa pues, diciendo que puso una almohada y que resulto afortunado, sin que dicha situación pasara a mayores.

(...)

Pero lo más desacertado y que incluso debe ser evaluado por parte de usted señor Juez, si dichos comportamientos en el ámbito profesional, ameritan una investigación disciplinaria, tanto al Comisario de Familia, como a la profesional en Psicóloga Jenny Alexandra Rey Jagua, es que se evalué los factores de riesgo del niño, omitiendo gravemente que tanto en el Instituto Nacional de Medicina Legal, como en la entrevista practicada, el niño SEBASTIAN manifiesta: "...Mi papá es bien conmigo la última vez que me pego fue hace como un año, me dejo un morado por un mes no me acuerdo porque fue, me pego con la correa. pero el tiene fuerza, me pego en el muslo..."

En el fallo apelado, se observa que el Comisario de Familia, incurre en una incongruencia evidente; visible a folio de numeración del fallo, página 29 y 30, pues indica que niega la petición de custodia de su hijo SEBASTIAN, realizada por el señor CARLOS ANTONIO ALVARADO REYES, en su solicitud de medida de protección, que por cierto era su pretensión principal oculta en una solicitud de medida de protección, pero posteriormente cita el art 17 de la Ley 2126 de 2021, y realiza modificación a la custodia y cuidado personal, del niño, en un grave acto de vulneración al debido proceso y al derecho a la integridad personal del niño SEBASTIAN, pues sin contar con la verificación de derechos del niño, que le permitiera conceptos del equipo psicosocial, frente a estados de salud psicológico de los padres, que le permitieran establecer como autoridad administrativa, que el señor CARLOS ANTONIO ALVARADO REYES, cuenta con la suficiente idoneidad para asumir la custodia de su hijo de manera compartida.

Expuesto lo anterior, el despacho entra a resolver este asunto, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Mediante la Ley 294 de 1996, reformada por la Ley 575 de 2000, se desarrolló el artículo 42 de la Constitución Nacional, previendo en su art. 4º:

"Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de un daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de Familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al Juez Civil o Promiscuo Municipal, una medida de Protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que este se realice cuando fuere inminente".

La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión de algún miembro de la familia, que infrinja a otros parientes daño físico, psicológico, económico, sexual, social o emocional. El código penal tipifica el delito de violencia intrafamiliar así: *“El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de sesenta (60) años, o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad.”*

Es importante resaltar lo consagrado por la Constitución Política en su artículo 42-5 que reza: *“Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley”*.

En desarrollo de las normas referidas, se expidieron las leyes 294 de 1996 y 575 del año 2000, encaminadas a *“garantizar los derechos de los miembros más débiles de la sociedad (menores, ancianos y mujeres), erradicar la violencia de la familia; es objetivo en el cual está comprometido el interés general, por ser la familia la institución básica y núcleo fundamental de la sociedad, y por ser un espacio básico para la consolidación de la paz”*. Sentencia C-285 del 5 de junio de 1997, Corte Constitucional.

Ahora bien, es importante destacar que **los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes** los establece el artículo 44 de la Carta Política; entre ellos se encuentran *“la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.”*

En efecto, la Constitución Política de Colombia y la Ley de Infancia y Adolescencia, han establecido que los niños niñas, y adolescentes gozan de una protección constitucional especial, derivada precisamente de la situación de indefensión y vulnerabilidad a la que se encuentra sujeta la población infantil.

Sobre el particular, la Convención sobre Derechos de los Niños, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, tratan a los niños como sujetos activos, frente a los cuales los Estados tienen un deber especial de protección.

Por su parte, en el artículo 8 de la Ley de Infancia y la Adolescencia¹ se define el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes como *“(…) el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”*.

En ese sentido, la Honorable Corte Constitucional ha precisado que todas las actuaciones que realicen las autoridades en las que se encuentren involucrados niños, niñas o adolescentes deben estar orientadas por el principio del interés superior².

¹ Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006.

² Corte Constitucional, sentencia T-408-95, expediente T-71149, M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz.

Específicamente, el artículo 44 de la Constitución Política es inequívoco al establecer que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, como consecuencia del especial grado de protección que aquellos requieren, dadas sus condiciones de vulnerabilidad e indefensión, y la especial atención con que se debe salvaguardar su proceso de desarrollo y formación.

La Corte Constitucional ha sido enfática al señalar cuáles son las condiciones que mejor satisfacen el interés superior de los niños en situaciones concretas, que deben ser atendidas por las autoridades llamadas a proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, tales como: (i) fácticas –las circunstancias específicas del caso, visto en su totalidad y no atendiendo a aspectos aislados–, como (ii) jurídicas –los parámetros y criterios establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil–.

En este sentido, cada asunto particular que involucre la protección del derecho prevaleciente e interés superior de los niños, niñas y adolescentes, debe estudiarse de acuerdo con las consideraciones individuales y características para cada caso, teniendo en cuenta los derechos propios del menor de edad, como lo son el amor, la asistencia, el cuidado y la protección debida al desarrollo de su personalidad, en procura de alcanzar condiciones más favorables y dignas para su desarrollo psicosocial.

En esta instancia, es importante hacer mención sobre el **maltrato infantil**, desarrollado en el artículo 18 de la Ley 1098 de 2006, el cual prevé que: “se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, **incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona.**”(Resaltado fuera del texto)

Este concepto ha sido desarrollado en la Sentencia C – 442 de 2009 la cual indica al maltrato infantil “(...) como toda conducta que tenga por resultado la afectación en cualquier sentido de la integridad física, psicológica o moral de los(as) menores de dieciocho (18) años por parte de cualquier persona...”.

Por su parte, la ley 1098 de 2006, consagra las obligaciones del Estado, la familia, la sociedad y las instituciones educativas, reiterando que es compromiso tanto del estado como de la sociedad civil, la protección y promoción de los derechos de los niños.

Sobre los riesgos prohibidos, ha dicho el Alto Tribunal Constitucional:

*“...La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades respecto de los **riesgos que pueden amenazar o perturbar la integridad de los menores de edad**. A esta categoría de riesgos se les ha denominado **“riesgos prohibidos”**. En este punto se debe examinar si los niños se encuentran frente a amenazas que trunquen su desarrollo armónico, tales como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia física o moral, la explotación económica y laboral y cualquier forma de irrespeto a la dignidad humana, conductas que se encuentran expresamente prohibidas por el Código del Menor. Igualmente, se debe examinar si los menores se encuentran en situaciones irregulares, previstas en el Código Penal” (Sentencia T-551/06).*

Al respecto sostuvo la H. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en sentencia STC 873 del 1 de febrero de 2019 M.P. **LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA**:

“Para reprender al niño no es necesario causarle daño en su cuerpo o en su alma. Es suficiente muchas veces asumir frente a él una actitud severa despojada de violencia; reconvenirlo con prudente energía; privarlo temporalmente de cierta diversión; abstenerse de otorgarle determinado premio o distinción; hacerle ver los efectos negativos de la falta cometida. La eficacia de la sanción no estriba en la mayor intensidad del dolor que pueda causar sino en la inteligencia y en la firmeza con que se aplique, así como en la certidumbre que ofrezca sobre la real transmisión del mensaje implícito en la reprensión. En tal sentido, no se trata de ocasionar sufrimiento o de sacrificar al sujeto pasivo de la sanción sino de reconvenirlo civilizadamente en aras de la adecuación de sus posteriores respuestas a los estímulos educativos (...).”

“El uso de la fuerza bruta para sancionar a un niño constituye grave atentado contra su dignidad, ataque a su integridad corporal y daño, muchas veces irremediable, a su estabilidad emocional y afectiva. Genera en el menor reacciones psicológicas contra quien le aplica el castigo y contra la sociedad. Ocasiona invariablemente el progresivo endurecimiento de su espíritu, la pérdida paulatina de sus más nobles sentimientos y la búsqueda -consciente o inconsciente- de retaliación posterior, de la cual muy seguramente hará víctimas a sus propios hijos, dando lugar a un interminable proceso de violencia que necesariamente altera la pacífica convivencia social (...).” (Negrilla y subrayado fuera del texto)

Asimismo, el H. Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Familia en providencia de fecha 12 de agosto de 2020 con ponencia la Dra. **LUCÍA JOSEFINA HERRERA LÓPEZ**, adoctrino lo siguiente:

“Debe comprender y aprender la accionante a relacionarse con los demás desde el respeto y consideración propios, sin maltratar, menospreciar u ofender; entender la autoridad parental como el mecanismo adecuado para cumplir sus obligaciones de orientación hacia su hija³, desde el amor y la razón, no desde el autoritarismo y el maltrato físico, verbal y psicológico, pues, el objetivo no es convertir a los niños en seres temerosos, reactivamente agresivos o sometidos a quien mayor violencia puede ejercer; se trata de formar personas, autónomas, razonables, afectuosas, respetuosas de los derechos de los otros y de su entorno, en fin, personas felices”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Además, el artículo 14 del Código de Infancia y Adolescencia, establece:

La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos.

En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

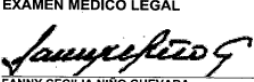
³ Ver sentencia C- 262 de 2016, M.P. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Llegado a este punto, se procede a resolver el fondo del asunto de acuerdo con el recurso de alzada interpuesto por la parte accionante.

Para iniciar, conviene señalar que, a juicio de este despacho, la comisaría de familia realizó una valoración probatoria sesgada y parcializada de todo el material probatorio que obra en el expediente, tal y como a continuación pasa a exponerse:

En efecto, lo primero que debe destacarse y que es importante que las autoridades administrativas deben tener en cuenta, es que no es posible iniciar una acción de protección o un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, haciendo una verificación de derechos del adolescente sin que el menor de edad esté presente y sus dos representantes legales o custodiantes como ocurrió en este asunto, en donde ni siquiera se citó al niño y a su progenitora quien es la persona que se encarga de su cuidado personal, es decir que, dicha verificación se basó únicamente en la información que suministró el padre no cuidador y el que visita al niño cada 15 días con un agravante y es que se pasa por alto el presunto incumplimiento al derecho de los alimentos que la progenitora ha denunciado no se está cumpliendo.

Acto seguido, no cabe duda que en este caso, el adolescente SEBASTIAN ALVARADO OROZCO tiene problemas de comportamiento que han sido altamente evidenciados en todas las pruebas documentales tales como informes de los colegios donde ha estudiado, informes psicológicos tanto particulares como la entrevista realizada por la Comisaría, que permiten llegar al convencimiento que, debido al comportamiento del adolescente, no solo ha sido su progenitora quien ha proporcionado correcciones físicas hacia su hijo sino también el padre, tal y como el mismo adolescente lo informó en la valoración que se le hicieron en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como pasa a verse:

IDENTIFICACION:	111146685019
EDAD REFERIDA:	11 años
ASUNTO:	Lesiones / Violencia a niños, niñas y adolescentes
Metodología: • La aplicación del método científico en el desarrollo de las valoraciones medicolegales, la documentación y el manejo técnico de los elementos de prueba recolectados y asociados, que deberán ser utilizados y analizados en el contexto específico de cada caso; como se establece en el Reglamento Técnico para el Abordaje Integral de Lesiones en Clínica Forense DG-M-RT-01-V01, Versión 01 de octubre de 2010.	
Examinado hoy lunes 12 de septiembre de 2022 a las 08:21 horas en Primer Reconocimiento Médico Legal. Previa explicación de los procedimientos a realizar en la valoración, la importancia de los mismos para el proceso judicial o administrativo, se diligenció el consentimiento informado, se toma huella dactilar del índice derecho del examinado y firma y huella del índice derecho del representante legal: CARLOS ANTONIO ALVARADO REYES CC No 17590745 PADRE DEL MENOR, en el consentimiento informado	
INFORMACIÓN ADICIONAL AL COMENZAR EL ABORDAJE FORENSE: Aporta OFICIO PETITORIO.	
RELATO DE LOS HECHOS: El examinado refiere " tengo 11 años, vivo con mi mamá, mi papá vive solo, estoy en sexto, estudio en la mañana y en la tarde hago tareas, me quedo con mi mamá. Mi mamá ayer me dio con la correa porque no quería organizar un juguete, no me dio duro, a los 9 años me había pegado. Hace un año mi papá me pegó no me acuerdo porque, él también me pegó con una correa. Antes me pegaba mi hermano".	
ANTECEDENTES: Patológicos: RINITIS. Quirúrgicos: NO REFIERE.	
REVISIÓN POR SISTEMAS NO REFIERE	
EXAMEN MÉDICO LEGAL	
 FANNY CECILIA NIÑO GUEVARA PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE	
Ciencia con sentido humanitario, un mejor país	
12/09/2022 08:51	Pag. 1 de 2

Nótese como del relato del menor de edad se observa claramente que el adolescente refiere que su padre también le pegó con una correa, es decir que, los métodos de corrección que ambos padres han utilizado no han sido los apropiados para con su menor hijo.

Ahora bien, respecto a este informe médico legal, debe decirse que, si bien es cierto SEBASTIAN refiere que el día anterior su progenitora lo había castigado con una correa, su examen físico no muestra ninguna huella de dicho acontecimiento, aunado al hecho que, el Comisario nada indagó respecto a si el adolescente ese fin de semana había pernoctado con su padre debido a las visitas que tiene reglamentadas por el ICBF, es decir, que no existe certeza respecto de que dicho maltrato físico en efecto se hubiera ocasionado específicamente el día anterior al examen médico legal, al punto que, como ya lo mencionamos, no quedó ninguna huella en su cuerpo como lo concluye la médico legista, de hecho llega a la inequívoca conclusión que: "...sin

signos clínicos compatibles con síndrome de niño maltratado por maltrato físico agudo u omisión en su cuidado..."

Lo que si pasa por alto el a quo es la recomendación que hace Medicina Legal respecto a la sugerencia de una intervención psicosocial al núcleo familiar, no solamente al niño o a la progenitora, sino a toda la familia.

INFORME PERICIAL DE CLÍNICA FORENSE
Número único de informe: UBBOGAT-DRBO-08550-2022

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: Peso: 32 kg. Talla: 139 cm.
Aspecto general: Adecuada presentación personal
Descripción de hallazgos

- Neurológico: consciente, alerta
- Cara, cabeza, cuello: sin signos clínicos de trauma al momento del examen
- Cavidad oral: dentición permanente incompleta, última pieza dentaria erupcionada segundo molar inferior izquierdo en fase media, se observa la presencia de material de ortodoncia en arcadas dentarias
- Tórax: sin signos clínicos de trauma al momento del examen
- Abdomen: sin signos clínicos de trauma al momento del examen
- Espalda: sin signos clínicos de trauma al momento del examen
- Miembros superiores: sin signos clínicos de trauma al momento del examen
- Miembros inferiores: sin signos clínicos de trauma al momento del examen

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES
No existen huellas externas de lesión reciente al momento del examen que permitan fundamentar una incapacidad médico legal.
Niño con adecuada presentación personal, peso, talla, erupción dentaria adecuados a la edad referida, sin signos clínicos compatibles con síndrome de niño maltratado por maltrato físico agudo u omisión en su cuidado.

- Se recomienda inicio de proceso psicoterapéutico por psicología clínica para el examinado a través de la entidad en la que se encuentra afiliado. Se sugiere que dicho concepto sea tenido en cuenta como parte del proceso de investigación. - Se sugiere intervención psicosocial al núcleo familiar.

Atentamente,

En cuanto a la entrevista realizada al adolescente, se observa que, la comisaría hace un corto análisis de todo lo que el menor de edad expresa en dicha entrevista, de la cual, sin mayor esfuerzo se puede llegar a las siguientes conclusiones:

a.- El adolescente permanece la gran parte de su tiempo con su progenitora, es decir que es ella quien está asumiendo la crianza y educación de su hijo, con inadecuadas pautas de crianza, utilizando en algunas ocasiones correcciones físicas.

b.- El adolescente solo ve a su progenitor cada 15 días, es decir que el señor CARLOS ANTONIO ALVARADO REYES no participa activamente de la crianza de su hijo, descargando dicha responsabilidad únicamente en la progenitora.

c.- El padre, también ejerce correcciones físicas en contra de su hijo, lo que se relaciona incluso por lo dicho por el adolescente en medicina legal, situación que pasa por alto la autoridad administrativa o mejor, le resta importancia enfocándose únicamente en el actuar de la progenitora, en efecto, el adolescente señala lo siguiente en la entrevista:

¿Cómo es la relación con tu papá? - Con mi papá la relación es bien, cada quince días me veo con mi papá, vamos a jugar futbol, vamos a cine, y hacer lo que queramos, abrir monas. Mi papá es bien conmigo la última vez que me pego fue hace como un año, me dejó un morado por un mes no me acuerdo porque fue, me pego con la correa, pero él tiene fuerza, me pego en el muslo. A mi papá le hago mas caso que a mi mamá desde pequeño le he hecho más caso, yo con él igual es que me veo muy poco, por eso es que aprovechamos lo que se pueda, porque se va el día rápido, por eso es que vamos a cine y demás. Cuando voy donde mi papá ese fin de semana la ruta me deja el viernes donde mi papá y mi mamá me recoge el domingo.

Sebastián, ¿Cómo es la relación entre tu papá y tu mamá? - La relación de mi papá con mi mamá es mala, la verdad es que mi papá poco le habla a mi mamá y cuando mi mamá lo ve le hace mala cara, los dos se tratan mal entre sí, hace dos años no discuten, durante la pandemia yo estuve con mi papá en casa de él, él vive solo en esos días mi mamá me llamaba y preguntaba cómo estaba y demás me gustaba estar allá porque no había clases y todo estábamos felices porque no teníamos que ir al colegio. Ese año e la pandemia en Agosto, mi tía la hermana de mi mamá me regalaron la play, ese día que me lo dieron yo estaba muy emocionado y feliz. La verdad yo veo a mi papá cómo bien porque con el no tengo que hacer tareas porque ya las llevo hechas. Yo veo a mi mamá como que me toca hacer tareas o que me va a regañar, lo normal. Mi papá me lleva al psicólogo, desde este año, él no me ha dicho porque me lleva. En esas terapias hablo con la psicóloga y le cuento lo que me pregunta, me pregunta lo que ha pasado en el colegio, no me pregunta por cosas de la casa. Voy a psicóloga a las cinco de la tarde cada quince días los sábados. Yo ya no quiero ir, porque durante ese tiempo puedo hacer otras cosas, ir al parque a saltar a correr. A mí me gustaría que mis papás fueran a psicología para que mejoraran porque el psicólogo hace que mejore la familia.

Véase que SEBASTIÁN señala que su padre también lo maltrató físicamente dejándole un morado dice el menor de edad por un mes, "... **me pego con la correa, pero él tiene fuerza, me pegó en el muslo...**"

d.- La relación de los padres de SEBASTIAN es pésima, y el trato de los dos en presencia de su hijo no es recomendable, es decir que, no es sólo la señora ANGELICA OROZCO CABRERA, sino también el padre de SEBASTIAN.

e.- La entrevista dejar ver con claridad que, quien impone pautas de crianza es la progenitora a quien le toca asumir su cuidado personal, el apoyo en tareas y trabajos, y con el padre únicamente comparte espacios de recreación y descanso, lo cual, permite en el adolescente hacer distinción de con quién si la pasa bien, desde su punto de vista.

Finalmente, de los testimonios allegados únicamente se logra establecer que SEBASTIAN ha sido cuidado la mayor parte de su vida por su progenitora quien cuenta con una buena red de apoyo familiar materna, y que, no han visto que la aquí accionada maltrate físicamente al niño, sin embargo, esta prueba testimonial coincide con las diferentes pruebas científicas en cuanto a que existe actualmente un problema de comportamiento de SEBASTIAN, que dificulta su corrección.

Ahora bien, respecto a que el adolescente tiene conductas inadecuadas en el colegio y utiliza un lenguaje inapropiado por culpa de su progenitora, debe decirse que esa afirmación no fue comprobada de ninguna manera, sin que se le pueda endilgar a la señora ANGELICA OROZCO CABRERA que no ha sido un buen ejemplo para su hijo y por eso él se comporta de una manera inadecuada.

Tampoco quedó probado que la señora ANGELICA OROZCO CABRERA se dirigiera de una manera despectiva, agresiva o mal educada hacia el señor CARLOS ANTONIO ALVARADO REYES y mucho menos delante de su hijo, pues SEBASTIAN en sus entrevistas no señaló dicha conducta.

Llegado a este punto, se puede concluir sin más consideraciones que, en efecto, son ambos padres quienes han ejercido de alguna manera actos de maltrato hacia su hijo, debido a su comportamiento inadecuado, llevándolos a desplegar indebidas pautas de crianza, señalamiento que no recae únicamente en cabeza de la progenitora, sino que, está comprobado con todas las pruebas que obran en el expediente que también el padre no ha ejercido una adecuada crianza hacia su hijo, al punto que también lo ha maltratado físicamente.

No es apropiado que, los padres en procura de conseguir que su hijo cumpla con las normas de la casa, lo amenacen con palos, correas, o incluso lo maltraten físicamente, pues es claro que, en este caso, se requiere con urgencia que ambos progenitores reconozcan que su actuar no ha sido el más adecuado con su hijo, y sean incluidos tratamientos psicoterapéuticos de pautas de crianza, comunicación asertiva de padres separados, motivo por el cual, encuentra este despacho que la medida de protección a favor de SEBASTIAN ALVARADO OROZCO debe ir en contra de ambos padres, por las inadecuadas pautas de crianza y castigo físico hacia su hijo.

Finalmente, encuentra el despacho que, el fallo recurrido respecto a modificar la custodia y cuidado personal del adolescente en cabeza de su progenitora debe REVOCARSE, como quiera que dentro de esta acción de protección no quedó demostrada la necesidad de realizar semejante cambio en la vida de SEBASTIAN, y mucho menos se hizo un análisis probatorio que demostrara que en este caso resulta conveniente una custodia compartida en cabeza de ambos progenitores.

Nótese la total inconveniencia de dicha medida, toda vez que, en este caso, los padres de SEBASTIAN tienen una pésima relación que no permite que dicha custodia compartida se desarrolle de manera pacífica y en beneficio exclusivo del adolescente, pues además, no existe una comunicación asertiva, no están enfilados en ponerse de acuerdo con la crianza de su hijo, y como si fuera poco, ni siquiera obra prueba siquiera

sumaría que el señor CARLOS ANTONIO ALVARADO REYES esté en las condiciones adecuadas para recibir a su hijo, aunado al hecho que se ha puesto en conocimiento en reiteradas oportunidades que el padre no está al día con sus obligaciones alimentarias, no está permanentemente activo en la vida de su hijo, pues únicamente se limita a visitarlo cada 15 días, lo que reafirma la inconveniencia de modificar la custodia, aunado al hecho que la comisaría de familia nunca tuvo en cuenta la opinión de SEBASTIAN que ya es un adolescente, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1098 de 2006.

Sumando a lo anterior, debe destacarse que las acciones de protección no pueden convertirse en procesos de custodia y cuidado personal, pues si finalmente es lo que pretende el padre del adolescente tal y como la misma comisaría lo señala, deberá acudir a la instancia judicial dispuesta para ello y no utilizar esta herramienta constitucional excepcional para suplir el procedimiento indicado por la Ley.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

R E S U E L V E:

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la providencia del treinta (30) de diciembre de 2022, proferida por la Comisaría Once de Familia de Suba I, por las razones expuestas en la motivación de este proveído.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral PRIMERO la providencia del treinta (30) de diciembre de 2022, proferida por la Comisaría Once de Familia de Suba I, en el sentido de imponer MEDIDA DE PROTECCION DEFINITIVA M.P 1131-2022 RUG 2056-2022 a favor de **SEBASTIAN ALVARADO OROZCO** y en contra de **ANGELICA OROZCO CABRERA y CARLOS ANTONIO ALVARADO REYES**, a quienes se les **CONMINA** para que se abstengan de realizar cualquier acto de violencia física, verbal, psicológica, económica, patrimonial, sexual,; ofensa, acoso, humillación, intimidación, o agravio en contra del adolescente **SEBASTIAN ALVARADO OROZCO**, so pena de hacerse acreedores a las sanciones previstas en la ley 294 de 1996, 575 del año 2000, ley 1257 de 2008, ley 2126 de 2021 y demás normas concordantes.

TERCERO: REVOCAR íntegramente el numeral cuarto de la providencia del treinta (30) de diciembre de 2022, proferida por la Comisaría Once de Familia de Suba I, manteniendo la custodia y régimen de visitas a favor del adolescente SEBASTIAN ALVARADO OROZCO establecido en el Acta de Conciliación No. 050 suscrita ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

CUARTO: ORDENAR a la Comisaría Once de Familia de Suba I, que, dentro del presente trámite, se remita de manera inmediata a las partes a un proceso de acompañamiento psicoterapéutico en el que reciba orientación y apoyo en la resolución pacífica de conflictos, manejo de emociones, comunicación asertiva, erradicación de toda forma de maltrato, pautas de crianza a favor del menor de edad.

QUINTO: Por secretaría devuélvase el expediente a la Comisaría de origen, dejando las constancias del caso y previa remisión vía correo electrónico de lo decidido.

Notifíquese esta decisión a la Procuradora judicial adscrita al despacho y a las partes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ
JUEZ

AP.

JUZGADO NOVENO (9) DE FAMILIA DE BOGOTÁ
NOTIFICACIÓN POR ESTADO – SECRETARÍA
Bogotá D.C., **13 de JUNIO de 2023**
El auto anterior queda notificado a las partes por
anotación en el ESTADO No. 93
ALISSON SANTAMARÍA CÁRDENAS
Secretaria